

Santiago, veinticinco de enero de dos mil veinticuatro.

Vistos, oídos y considerando:

PRIMERO: Que comparece el abogado Matías Horacio Novoa Carbone, domiciliado en calle Morandé N°835, oficina 1215, comuna de Santiago, en representación de don **JEIBER JESUS MORALES HIDALGO**, R.U.N.: 26.104.701-2, venezolano, Conductor Captador Estacionador; don **ROLANDO ANDRES ILLANES GONZALEZ**, R.U.N.: 20.085.832-8, venezolano, Conductor Captador Estacionador, y doña **ESTEFANI DEL VALLE RAMIREZ SIERRA**, R.U.N.: 27.098.020-1, venezolana, Llave Direccionadora, todos con su mismo domicilio, quien interpone demanda en procedimiento de aplicación general solicitando la declaración de existencia de régimen en subcontratación y cobro de prestaciones e indemnizaciones en contra de **CLÍNICA SANTA MARÍA SpA**, R.U.T.: 90.753.000-0, empresa de giro actividades de hospitales y clínicas privadas, representada legalmente por Arturo Perú Costabal, R.U.N.: 7.010.596-9, ambos con domicilio en Avenida Santa María N°410, comuna de Providencia.

Funda su demanda en que sus representados prestaron servicios en los términos de los artículos 7° y 8° del Código del Trabajo, en las fechas que indica en la demanda, para la empresa contratista Secure Valet Parking Limitada, servicios se prestaron en los estacionamientos de la conocida Clínica Santa María, ubicados en Avenida Santa María N°500, comuna de Providencia, encontrándose sujetos todos los actores estaban sujetos a una jornada de trabajo de 45 horas semanales, distribuidas de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Expone que sus representados decidieron hacer valer el derecho que les confiere en el artículo 171 del Código Laboral, autodespidiéndose los días 20 de enero de 2021 –en el caso de los trabajadores Rolando Illanes y Jeiber Morales- y 01 de febrero de 2021–en el caso de la subordinada Estefani Ramirez-, respectivamente. Todas las cartas invocan como causal legal de terminación de los contratos la del artículo 160 N° 7.- del Código del Trabajo, esto es, “Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato”, presentando demanda laboral, con fecha 30 de marzo de 2021, en contra de su ex empleador, caratulada “RAMIREZ/SECURE VALET PARKING LIMITADA”, R.I.T.: O1912-



2021, del 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. En ella se demandó de forma principal a SECURE VALET PARKING LIMITADA, y en régimen de subcontratación a la empresa INVERSIONES SANTA MARÍA S.A., R.U.T.: 99.575.080-5.

Durante la secuela del juicio, la empresa demandada principal, SECURE VALET PARKING LIMITADA, negó genéricamente los incumplimientos, mas resultó igualmente condenada, habiendo contestado y comparecido también la demandada solidaria o subsidiaria INVERSIONES SANTA MARÍA S.A. En lo medular, la ya señalada empresa demandada solidaria opuso excepción de falta de legitimación pasiva, alegando que: "...Inversiones Santa María S.A. es, tal como su nombre lo indica, una sociedad de inversiones, que posee participación accionaria en las empresas que administran y gestionan el funcionamiento del establecimiento de salud privada Clínica Santa María.

Pues bien, durante la tramitación del juicio se pudo corroborar que efectivamente la empresa INVERSIONES SANTA MARÍA S.A. no mantenía ni mantuvo un contrato civil o mercantil con la empresa contratista SECURE VALET PARKING LIMITADA: en realidad, el contrato de esta última era con CLÍNICA SANTA MARÍA S.P.A. En esencia, la extrema similitud de las razones sociales, y la ausencia de especificaciones que clarificaran de manera completamente indubitable la empresa mandante en sus respectivos contratos de trabajo, fue lo que llevó a los actores, de buena fe y en un yerro comprensible, a demandar incorrectamente a la empresa Inversiones Santa María S.A.

Finalmente, se dictó la correspondiente sentencia definitiva el día 22 de junio de 2022 en la causa R.I.T. O-1912-2021 del 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, por el Magistrado Víctor Covarrubias Suárez, acogándose parcialmente la demanda interpuesta por los actores, declarándose que sus autodespidos eran justificados y además nulo en el caso de Estefani Ramírez, y condenándose a la demandada SECURE VALET PARKING LIMITADA al pago de las indemnizaciones y prestaciones que indica. De igual manera, se rechazó la demanda interpuesta en contra de la empresa INVERSIONES SANTA MARÍA



S.A., acogiendo la excepción de falta de legitimación pasiva, por no configurarse –a criterio del juzgador- un régimen de subcontratación con la misma.

La sentencia actualmente se encuentra firme y ejecutoriada, habiendo sido remitidos los antecedentes al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, donde se tramita bajo el R.I.T. C-3335-2022, causa caratulada “RAMIREZ/SECURE VALET PARKING LIMITADA”. Lo señalado en el párrafo anterior, por cuanto la empresa SECURE VALET PARKING LIMITADA no cumplió lo resuelto en ambos fallos dentro de quinto día. La deuda líquida, a la fecha de presentación de esta demanda, asciende a: \$20.318.741.-

En virtud de lo antedicho, se demanda a la empresa CLÍNICA SANTA MARÍA S.P.A., a objeto de hacer efectiva su responsabilidad solidaria o subsidiaria –según determine por su calidad de empresa mandante en los vínculos laborales de los actores, solicitando se le condene al pago de las prestaciones e indemnizaciones que indica.

SEGUNDO: Que la empresa demandada contestó el libelo, solicitando su rechazo, sin perjuicio de reconocer la existencia del proceso laboral anterior mencionado en la demanda, en que los tres trabajadores demandantes demandaron a su ex empleador sociedad Inversiones Santa María S.A., no siendo emplazado en dicho juicio su representada.

Opone en primer término excepción de falta de litis consorcio pasivo necesario, atendido que los demandantes no han dirigido las acciones de autos en contra de quien fue su empleadora directa, la sociedad Secure Valet Parking. Lo anterior, es relevante para el curso y desenlace del procedimiento puesto que los Actores pretenden fundar sus acciones en la norma contenida en el artículo 183-B del Código del Trabajo, esto, la responsabilidad solidaria o subsidiaria de la Empresa Mandante o Principal ante incumplimientos de la Empresa Contratista, omitiendo el tenor literal del inciso 4° de la norma legal referida, transcribiéndolo, norma respecto de la cual concluye que para hacer efectiva la responsabilidad del dueño de la obra en la que prestaron servicios los demandantes en régimen de subcontratación, se debe demandar conjuntamente tanto al empleador como a la empresa principal o mandante.



En efecto, el inciso 4° del artículo 183 del Código del Trabajo, necesariamente debe interpretarse en el sentido de que cuando el trabajador pretenda hacer efectiva la responsabilidad del dueño de la obra, contratista o subcontratista, debe emplazarlo conjuntamente con el empleador, de manera que todos formen parte de la misma relación jurídico procesal, lo que se desprende tanto el elemento gramatical como lógico de interpretación de la ley, pues al indicarse que la empresa principal será solidariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales de dar que afecten a los contratistas en favor de los trabajadores de éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que correspondan por término de la relación laboral, lo que el Legislador exige es que si el trabajador pretende hacer efectiva la responsabilidad de todos aquellos que resulten responsables, debe demandarlos conjuntamente con el empleador.

Lo expuesto no se ve modificado por la redacción del inciso 4° del artículo 183-B CT, al usar el verbo rector “PODRÁ”, porque lo que hace el Legislador es efectivamente dar un derecho de opción para elegir si se demanda solo al empleador, a algunos o a conjuntamente a todos los posibles partícipes de la cadena de subcontratación, pero, bajo ningún supuesto, el tenor literal de la norma legal referida permite demandar únicamente a la Empresa Mandante o Contratista.

Agrega que la exigencia de un “litis consorcio pasivo” tiene como fundamento principal, el principio de bilateralidad de la audiencia y en el derecho al debido proceso, por cuanto si lo que se pretende es extender los efectos de los incumplimientos del empleador directo -Empresa Contratista- a terceros que no tiene dicha calidad -Empresa Mandante o Principal-, lógico es que se le permita controvertir y presentar pruebas sobre aspectos tales como la existencia de la relación laboral, la remuneración pactada, el hecho del despido, las prestaciones adeudadas, o si las cotizaciones fueron o no pagadas, posibilidad que no se otorgó a la Empresa Contratista en la demanda de autos, por cuanto tales hechos fueron determinados en un juicio previo, en el cual no fue demandada ni emplazada mi representada, Clínica Santa María SpA, negándole la posibilidad de



formular alegaciones y presentar pruebas en dicha oportunidad procesal en apoyo de su alegaciones.

Tal indefensión se torna aún más patente en la demanda de autos si se considera que en el juicio anterior, causa RIT O-1912-2021 del Tribunal de S.S., no fue emplazada Clínica Santa María SpA, siendo demandada, por error de los demandantes, la sociedad Inversiones Santa María S.A.

Que, así las cosas, habiéndose establecido que el citado artículo 183-B del Código del Trabajo, establece como requisito la existencia en un juicio de un “litis consorcio pasivo necesario”, presupuesto que no se cumple en autos, la demandada debe necesariamente ser rechazada, por improcedente al no cumplir con los presupuestos procesales, que permitan a los actores accionar como lo han intentado los actores.

En subsidio, opone excepción de caducidad respecto de las acciones de cobro de indemnizaciones legales y prestaciones laborales intentadas por los actores en relación a la acción de pago por indemnización sustitutiva de aviso previo, indemnización por años de servicio y recargo legal, teniendo presente, que sin reconocer los hechos descritos en la demanda, dos de los actores afirman que ejercieron la facultad de despido indirecto con fecha 20 de enero de 2021; mientras que la demandante restante, indica que lo hizo con fecha 1 de febrero de 2021. Por lo tanto, el plazo para interponer la acción de declaración de despido injustificado y pago de indemnizaciones legales –sustitutiva de aviso previo y por años de servicio-, junto con el recargo legal demandado, caducó con fecha 31 de marzo de 2021 y 11 de abril, respectivamente, ya que los actores no indican haber presentado reclamo administrativo, por lo que el plazo de caducidad de 60 días hábiles, establecido en el artículo 168 CT, no fue interrumpido ni suspendido.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso que se consideré que los plazos de caducidad laboral comentados, por aplicación de la Ley N° 21.226 fueron prorrogados, dicha prórroga, bajo ningún supuesto, se extendió más allá del 30 de noviembre de 2021, en dicho escenario, el plazo de caducidad de 60 días, dispuesto por el artículo 169 CT, se extendió hasta el 11 de febrero de 2022.



En este sentido, considerando que la demanda de autos fue interpuesta con fecha 30 de agosto de 2022, resulta del todo evidente que las acciones de cobro asociadas a la declaración de despido injustificado –indemnizaciones sustitutiva de aviso previo, por años de servicio y recargo legal han sido afectadas por la institución de la caducidad.

De forma conjunta, opone excepción de prescripción de la acción de cobro de remuneración y nulidad de despido de los actores en virtud de lo establecido en el artículo 510 inciso 2° del Código del Trabajo, dicha acción prescribió con fecha 21 de julio de 2021 y el 10 de agosto, según sea el caso, esto es, luego de seis meses, contados desde la fecha en que se verificó el autodespido de los actores. Sin embargo, incluso si S.S. considera que el plazo de prescripción se debe contar desde el 30 de noviembre de 2021, este expiró con fecha 30 de mayo de 2022, en fecha anterior a la presentación de la demanda, hito que ocurrió el 30 de agosto del presente. Asimismo, y por los mismos antecedentes de hecho, pero fundamentada en el tenor literal del inciso 3° CT, las acciones relacionadas con la declaración de nulidad del despido, también se encuentran prescritas.

Una interpretación distinta a la expuesta en este capítulo tornaría en imprescriptible las acciones de cobro intentadas por los demandantes. Asimismo, cabe señalar que la prescripción, como un modo de extinguir derechos y obligaciones sólo produce efectos cuando ha sido judicialmente declarada.

En cuanto al fondo, sostiene que la demanda es vaga e imprecisa, podrá apreciar de la simple lectura de los hechos que sustenta la acción intentada por los actores, ésta no se sustenta en una relación de hechos concretos, citando doctrina y jurisprudencia que no se relaciona directamente con los hechos que sustentan la demanda, resultando incluso confusa la presentación de las mismas. Lo anterior, constituye un incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 446 N° 4 del CT. Al respecto, basta con señalar que, pese a relacionarse directamente con las normas del trabajo en régimen de subcontratación, los demandantes no han emplazado en este proceso judicial a la sociedad que fue su empleadora directa, la empresa Secure Valet Parking.



Lo anterior, transgrede de forma grave y manifiesta el derecho a defensa de mí representada, consagrado en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, al impedir el ejercicio de una defensa adecuada respecto a acciones de cobro tan vagas e imprecisas. Al respecto, la normativa vigente impone una carga procesal mínima a la parte denunciante al momento de interponer sus acciones y pretensiones, cual es una completa y precisa relación circunstanciada de los hechos que constituyen las causas de pedir. Exigencia que tiene su fundamento en el principio dispositivo que rige en los procedimientos laborales, conforme al cual, solamente las partes pueden introducir hechos al proceso mediante los escritos de alegación de fondo constituidos por la denuncia y contestación, que son los únicos que habilitan a las partes a allegar hechos al proceso, no pudiéndose complementar los hechos con diligencias procesales posteriores a la denuncia y contestación.

Los hechos relatados en la denuncia no son oponibles Clínica Santa María SpA, atendido que todos los antecedentes de hecho que hubiesen acontecido mientras los Actores y Secure Valet Parking mantuvieron una relación laboral y en los que no haya tenido participación un representante o mandatario de Clínica Santa María, resultan inoponibles a su representada. Asimismo, los antecedentes relacionados con la causa RIT O-1912-2021, tramitada ante el Tribunal, en los que no tuvo participación su representada, por no estar legalmente emplazada al efecto, les es del todo inoponibles a Clínica Santa María SpA.

Al efecto, la Doctrina ha definido la inoponibilidad como la sanción de ineficacia de un acto jurídico, respecto de ciertos terceros, y tiene su origen en no haber cumplido las partes que ejecutan el acto jurídico algún requisito externo o por lesionar intereses ajenos. Por tanto, se trata de una institución dirigida precisamente a proteger a los terceros. En el caso de autos, se trata de una inoponibilidad de fondo, ya que la sanción de ineficacia alegada respecto de hechos acontecidos a partir del inicio de la relación laboral y hasta el término de la misma entre los Actores y Secure Valet Parking, por una parte; y, por la otra, el juicio y la sentencia definitiva emitida en causa RIT O-1912-20211, constituyen



causas, consecuencias y efectos de una acción o acto que afectan injustamente los derechos de terceros, en este caso, a Clínica Santa María SpA.

Por otra parte, sostiene que sin perjuicio de negar la existencia de una relación laboral entre la demandante y la empresa principal, Clínica Santa María ejerció de forma mensual y oportuna su derecho de información y derecho de retención, cuando esto último fue procedente. Al efecto, en la etapa procesal pertinente, mi representada exhibirá, ofrecerá y acompañará los certificados emitidos por la Dirección del Trabajo (Certificados F-30), donde se da cuenta del ejercicio efectivo del derecho de información en el cumplimiento de las obligaciones laborales propias del vínculo contractual vigente entre las demandadas de autos. Por lo tanto, en atención a lo expuesto en los artículos 183-C y 183-D del Código del Trabajo, solicita tener presente que la eventual responsabilidad que pueda caber a su representada, debe ser aplicada en forma subsidiaria respecto de la empleadora principal, Secure Valet Parking.

Respecto a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 162 del CT a la empresa principal, alega su improcedencia, toda vez que la extensión de la responsabilidad solidaria que recaería sobre la empresa principal, al tenor del artículo 183-B del Código del Trabajo, no alcanza a la denominada “Ley Bustos”. El artículo 183-B, en su inciso primero, establece: “La empresa principal será solidariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales de dar que afecten a los contratistas en favor de los trabajadores de éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que correspondan por término de la relación laboral. Tal responsabilidad estará limitada al tiempo o período durante el cual el o los trabajadores prestaron servicios en régimen de subcontratación para la empresa principal”.

Por su parte, el artículo 183-C dispone que “La empresa principal, cuando así lo solicite, tendrá derecho a ser informada por los contratistas sobre el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a éstos correspondan respecto a sus trabajadores, como asimismo de igual tipo de obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores”.



De la lectura de los artículos citados, mencionar que las reformas introducidas por la Ley N° 20.123, que “Regula el trabajo en régimen de Subcontratación, el funcionamiento de las Empresas de Servicios Transitorios, y el contrato de trabajo de servicios transitorios”, en vigencia desde el 16 de enero de 2007, acotó y delimitó la responsabilidad del tercero a las obligaciones laborales y previsionales de dar que afecten a los empleadores y la limitó al tiempo en que los trabajadores hayan prestado servicios para el dueño de la obra en régimen de subcontratación.

Al efecto, debe entenderse por obligaciones laborales y previsionales de dar las que naturalmente surgen para el empleador como consecuencia de la vinculación laboral, para que proceda a su cumplimiento, motivo por el cual no es posible comprender entre ellas otro tipo de obligaciones que no revistan ese carácter. De esta forma, no existe norma legal alguna para que se aplique a la empresa principal, una norma sancionatoria como lo es el artículo 162 del CT, y específicamente en sus incisos quinto y séptimo -que por propia naturaleza es de derecho estricto y, por ende, de interpretación y aplicación restrictivos- pueda resultar aplicable al dueño de la obra o faena, cuyo régimen de responsabilidad quedó regulado y minuciosamente acotado en el Título VII Párrafo 1° del Libro I del citado CT, relativo al trabajo en régimen de subcontratación.

TERCERO: Que celebrada la audiencia preparatoria con fecha 18 de octubre de 2022, fueron llamadas las partes a conciliación, la que no prosperó, siendo conferido traslado de las excepciones opuestas por la demandada a la parte demandante, quedando su resolución para sentencia definitiva, siendo fijado como hecho no controvertido el siguiente: “Que la demandada CLÍNICA SANTA MARÍA S.P.A. no fue emplazada en el primer juicio causa RIT O-1912-2021 del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.”.

Asimismo, fue recibida la causa a prueba fijando los siguientes hechos a probar:

1) Efectividad de haber transcurrido el término legal para deducir las acciones de autos.



2) Contenido, términos y alcances de la sentencia pronunciada en causa RIT O-1912-2021 del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. Estado de la misma.

3) Efectividad que los demandantes prestaron servicios en régimen de subcontratación para la demandada CLÍNICA SANTA MARÍA S.P.A. En tal evento, si esta última hizo uso del derecho de información y retención.

CUARTO: Que para acreditar sus pretensiones la parte demandante ofreció e incorporó los siguientes medios probatorios:

-Documental:

1) Transcripción de Sentencia definitiva de fecha veintidós de junio de dos mil veintidós, causa RIT O-1912-2021, dictada por don VICTOR COVARRUBIAS SUAREZ, Juez Titular del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

2) Acta de audiencia de juicio de fecha 07.06.2022, causa RIT O-1912-2021, 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

3) Contrato de prestación de servicios suscrito entre SECURE VALET PARKING LIMITADA y la sociedad Clínica Santa María SpA, con fecha 1 de julio de 2012.

4) Adendum N° 1 de contrato de prestación de servicios suscrito entre SECURE VALET PARKING LIMITADA y la sociedad Clínica Santa María SpA, con fecha 1 de julio de 2018.

5) Adendum N° 2 de contrato de prestación de servicios suscrito entre SECURE VALET PARKING LIMITADA y la sociedad Clínica Santa María SpA, con fecha 1 de abril de 2020.

6) DETALLE DE LIQUIDACIÓN LABORAL de fecha 05.08.2022, en causa de cobranza laboral y previsional: C-3335-2022 Jdo. Cob. Laboral y Previsional de Santiago.

-Confesional: Absolvió posiciones doña Karla Jacqueline Moya Caro, en su calidad de representante legal de la demandada, según los antecedentes que constan en registro de audio.

-Oficio: Fue incorporada respuesta de oficio dirigido a la Dirección del Trabajo.



-Otros medios de prueba: Se tuvo a la vista causa laboral RIT O-1912-2021, caratulada “RAMÍREZ/SECURE VALET PARKING” del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, especialmente en lo que respecta a la presentación de demanda, contestaciones de demanda, incorporación de prueba documental, acta de audiencia preparatoria y de juicio, registros de audio de audiencias y dictación de sentencia.

QUINTO: Que la empresa demandada ofreció e incorporó los siguientes documentos:

1) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales N° 2000 / 2020 / 8656136, emitido por la Dirección del Trabajo, emitido con fecha 21 de febrero de 2020 y que da cuenta del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de la sociedad Secure Valet Parking, Rut N° 76.070.701-5, en su calidad de empresa contratista de la sociedad Clínica Santa María SpA, respecto de 19 trabajadores, entre los que se encuentran los demandantes.

2) Comprobante de declaración y pago de cotizaciones previsionales, N° de folio: 2080202001153593, emitido con fecha 21 de febrero de 2020, que da cuenta del pago de las cotizaciones pagadas a la AChS.

3) Contrato de prestación de servicios suscrito entre demandada principal y la sociedad Clínica Santa María SpA, con fecha 1 de julio de 2012.

4) Adendum N° 1 de contrato de prestación de servicios suscrito entre demandada principal y la sociedad Clínica Santa María SpA, con fecha 1° de julio de 2018.

5) Adendum N° 2 de contrato de prestación de servicios suscrito entre demandada principal y la sociedad Clínica Santa María SpA, con fecha 1 de abril de 2020.

6) Carta de Término de contrato de prestación de servicios, mediante la cual la sociedad Clínica Santa María SpA informa a la demandada principal el término de los servicios contratados a partir del día 31 de agosto de 2020.

7) Comprobante de envío de carta certificada, emitido por Correos de Chile.

8) Oficio N° 2/8572/2021, suscrito por doña Elizabeth Pino Cañas, Jefa de la Unidad de Requerimientos Inspectivos, que da cuenta del oficio remitido en



causa RIT O-1911-2021 del 1° Juzgado del Trabajo de Santiago, que consta de 21 Certificados de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales que dan cuenta del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de la sociedad Secure Valet Parking, Rut N° 76.070.701-5, en su calidad de empresa contratista Clínica Santa María SpA, respecto del lapso comprendido entre los meses de enero de 2019 y marzo de 2020, ambos meses incluidos.

-Oficio: Fue incorporada respuesta de oficio dirigido a la Dirección del Trabajo.

-Otros medios de prueba: Se tuvo a la vista los siguientes procesos:

a) Expediente íntegro de causa RIT O-1911-2021, del 1° Juzgado del Trabajo de Santiago.

b) Expediente íntegro de causa RIT O-1912-2021, del 2° Juzgado del Trabajo de Santiago.

SEXTO: Que apreciadas las pruebas incorporadas por las partes, conforme a las reglas de la sana crítica, importando con ello tomar en especial consideración la gravedad, concordancia, multiplicidad y conexión de aquellos medios probatorios incorporados por los intervinientes al proceso, permiten a este tribunal tener por acreditados los siguientes hechos de la causa:

a) Que los trabajadores Jeiber Jesús Morales Hidalgo y Rolando Andrés Illanes González fueron trabajadores dependientes de la empresa Secure Valet Parking Limitada en el periodo comprendido entre el 1° de julio 2019 al 20 de enero de 2021 y, la trabajadora Estefani del Valle Ramírez Sierra en el periodo comprendido entre el 27 de agosto de 2019 y hasta el 1° de febrero de 2021; hecho que se tiene por establecido con el mérito de los hechos establecidos en sentencia ejecutoriada dictada en causa tramitada ante este mismo Tribunal con fecha 07 de junio de 2022 bajo el Rit N° O-1912-2021, de conformidad a los antecedentes documentales incorporados por la parte demandante y causa tenida a la vista por este Tribunal.

b) Que los trabajadores Jeiber Jesús Morales Hidalgo, Rolando Andrés Illanes González y Estefani del Valle Ramírez Sierra desempeñaron servicios como conductor, captador y estacionador en el caso de los dos primeros y de



llavera direccionadora, en el caso de la última trabajadora, en el estacionamiento de la Clínica Santa María, ubicado en Av. Santa María 0500, Providencia; hecho que se tiene por establecido con el mérito de los hechos establecidos en sentencia ejecutoriada dictada en causa tramitada ante este mismo Tribunal con fecha 07 de junio de 2022 bajo el Rit N° O-1912-2021, de conformidad a los antecedentes documentales incorporados por la parte demandante y causa tenida a la vista por este Tribunal.

c) Que por medio de sentencia definitiva dictada en audiencia de juicio con fecha 07 de junio de 2022, en causa tramitada ante este mismo Tribunal, bajo el Rit N° O-1912-2021, fue acogida la demanda deducida por los trabajadores Jeiber Jesús Morales Hidalgo, Rolando Andrés Illanes González y Estefani del Valle Ramírez Sierra en contra de su ex empleadora Secure Valet Parking Limitada, declarándose en dicho proceso justificada la decisión de cada trabajador de poner término a sus respectivos contratos de trabajo con la empresa antes aludida en virtud de lo establecido en el artículo 171 del Código del Trabajo, ordenando el pago a cada actor de una serie de indemnizaciones legales y demás prestaciones laborales que se indica en dicho fallo, quedando ejecutoriado el mismo con fecha 21 de julio de 2022, remitiéndose dicho proceso para su cumplimiento al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago; hecho que se tiene por establecido con el mérito de los hechos establecidos en sentencia ejecutoriada dictada en causa tramitada ante este mismo Tribunal con fecha 07 de junio de 2022 bajo el Rit N° O-1912-2021, de conformidad a los antecedentes documentales incorporados por la parte demandante y causa tenida a la vista por este Tribunal.

d) Que ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, se tramita bajo el R.I.T. C-3335-2022, causa caratulada “RAMIREZ/SECURE VALET PARKING LIMITADA”, -aludida en la letra precedente-, existiendo a la fecha de presentación de la presente demanda, esto es, con fecha 30 de agosto de 2022, una deuda líquida ascendente a la suma de \$20.318.741; hecho que se tiene por establecido con el mérito el detalle de liquidación laboral incorporados por la parte



demandante, no objetados contrario, emitidos por el Juzgado de Cobranza antes aludido en el mes de agosto de 2022.

e) Que la demandada en estos autos, Clínica Santa María S.A., rut N°90.753.000-0, suscribió contrato de prestación de servicios con la empresa Secure Valet Parking Limitada con fecha 1° de julio de 2012, en virtud del cual, la primera contrató los servicios de la segunda a contar del día 13 de agosto de 2012 para recibir, estacionar y entregar los vehículos de los clientes que llegaban a los estacionamientos habilitados para tal efecto en dependencias de Clínica Santa María S.A., ubicada en Avenida Santa María N° 0500, comuna de Providencia, por el periodo de 30 días, entendiéndose renovado automáticamente sucesivamente por periodos semestrales, si ninguna de las partes manifestare voluntad de darlo por terminado en el plazo que indica; hecho que se tiene por establecido con el mérito del contrato antes aludido, incorporado por ambas partes.

f) Que con fecha 1° de abril de 2020 es modificado el contrato aludido en la letra precedente, en lo referido a la modificación de la sociedad contratante de los servicios, pasando a ser Clínica Santa María SpA, rut N° 90.753.000-0 y no Clínica Santa María S.A.; hecho que se tiene por establecido con el mérito del Adendum 2 Transitorio del contrato antes aludido, incorporado por ambas partes.

g) Que por medio de comunicación escrita de fecha 15 de julio de 2020 la demandada Clínica Santa María SpA informo a la empresa Secure Valet Parking Limitada, por medio de carta certificada de fecha 22 de julio de 2020, remitida al domicilio de esta última, que en virtud del Contrato de Prestación de Servicios de Valet Parking o Acomodación de vehículos celebrado entre dichas partes en el mes de julio de 2012 y, de conformidad a la cláusula décimo segunda del mismo, la decisión de no renovar la vigencia de dicho contrato, terminado el contrato vigente a contar del día 31 de agosto de 2020; hecho que se tiene por establecido con el mérito de la comunicación antes referida y comprobante de envío certificado adjuntado al dorso de la misma, documento incorporado por la demandada, no objetado de contrario.

h) Que los trabajadores Jeiber Jesús Morales Hidalgo y Rolando Andrés Illanes González aparecen informados como trabajadores dependientes de la



empresa Secure Valet Parking Limitada por la demandada Clínica Santa María para efectos de emisión del certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales ante la Dirección del trabajo en el periodo comprendido entre el mes de julio de 2019 y marzo de 2020 y, en el caso de la trabajadora Estefani del Valle Ramírez Sierra aparece en el periodo comprendido entre noviembre de 2019 y marzo de 2020; hecho que se tiene por establecido con el mérito de las respuestas de los oficios dirigidos a dicho Servicio administrativo y certificados remitidos y de la documental incorporada por la demandada, no objetada de contrario.

SEXTO: Que en relación a la excepción de falta de litis consorcio pasivo necesario opuesta por la demandada, cabe tener presente que esta la funda en que los demandantes no han dirigido las acciones de autos en contra de quien fue su empleadora directa, la sociedad Secure Valet Parking. Al efecto, cabe recordar que la presente demanda tiene por objeto obtener la declaración la existencia de trabajo de los actores en régimen de subcontratación respecto de la demandada Clínica Santa María SpA, con el objeto precisamente de poder hacer valer la responsabilidad que le correspondería a esta última, ya sea solidaria o subsidiaria, con el objeto de cobrar el crédito que tienen a su favor los trabajadores demandantes que hasta agosto de 2022, -fecha de presentación de la acción de autos-, asciende a la suma de \$20.318.741, de conformidad al detalle de liquidación del mismo efectuado por el Juzgado de Cobranza Laboral y previsional de Santiago, crédito declarado en sentencia definitiva dictada con fecha 07 de junio de 2022, en causa tramitada ante este mismo Tribunal bajo el Rit N° O-1912-2021, fallo ejecutoriado con fecha 21 de julio de 2022, sin que hasta la fecha, la empresa Secure Valet Parking Limitada hubiese cumplido con lo ordenado en virtud de dicho fallo en su calidad de ex empleador de los actores de autos, por lo que claramente procede que estos últimos puedan recurrir a través de la presente acción con el objeto de solicitar la declaración de responsabilidad de Clínica Santa María SpA bajo las normas de régimen de subcontratación, más aun si en el anterior proceso la parte demandante erró en la individualización de la empresa mandante, siendo acogida la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta en



el referido proceso por Inversiones Santa María S.A., no existiendo ningún argumento válido ni norma legal que obligue a la parte demandante a interponer nuevamente la acción en contra del ex empleador de los actores, respecto de la cual ya existe sentencia definitiva ejecutoriada que establece la existencia del vínculo laboral entre ellos y, que dicho vínculo culminó por la decisión justificada de trabajador de hacer uso de la facultad de auto despedirse, debiendo en consecuencia, desecharse la excepción deducida en todas sus partes.

SEPTIMO: Que en relación a la excepción de caducidad opuesta por la demandada respecto de las acciones de cobro de indemnizaciones legales y prestaciones laborales intentadas por los actores en relación a la acción de pago por indemnización sustitutiva de aviso previo, indemnización por años de servicio y recargo legal, la funda, en que sin reconocer los hechos descritos en la demanda, dos de los actores afirman que ejercieron la facultad de despido indirecto con fecha 20 de enero de 2021; mientras que la demandante restante, indica que lo hizo con fecha 1 de febrero de 2021, por lo tanto, el plazo para interponer la acción de declaración de despido injustificado y pago de indemnizaciones legales –sustitutiva de aviso previo y por años de servicio-, junto con el recargo legal demandado, caducó con fecha 31 de marzo de 2021 y 11 de abril, respectivamente, ya que los actores no indican haber presentado reclamo administrativo, por lo que el plazo de caducidad de 60 días hábiles, establecido en el artículo 168 CT, no fue interrumpido ni suspendido.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso que se consideré que los plazos de caducidad laboral comentados, por aplicación de la Ley N° 21.226 fueron prorrogados, dicha prórroga, bajo ningún supuesto, se extendió más allá del 30 de noviembre de 2021, en dicho escenario, el plazo de caducidad de 60 días, dispuesto por el artículo 169 CT, se extendió hasta el 11 de febrero de 2022.

En este sentido, sostiene que considerando que la demanda de autos fue interpuesta con fecha 30 de agosto de 2022, resulta del todo evidente que las acciones de cobro asociadas a la declaración de despido injustificado – indemnizaciones sustitutiva de aviso previo, por años de servicio y recargo legal han sido afectadas por la institución de la caducidad.



OCTAVO: Que al efecto, cabe tener presente nuevamente que se trata de un hecho establecido en el proceso, que por medio de sentencia definitiva dictada en audiencia de juicio celebrada con fecha 07 de junio de 2022, en causa tramitada ante este mismo Tribunal, bajo el Rit N° O-1912-2021, fue acogida la demanda deducida por los trabajadores Jeiber Jesús Morales Hidalgo, Rolando Andrés Illanes González y Estefani del Valle Ramírez Sierra en contra de su ex empleadora Secure Valet Parking Limitada, declarándose en dicho proceso justificada la decisión de cada trabajador de poner término a sus respectivos contratos de trabajo con la empresa antes aludida en virtud de lo establecido en el artículo 171 del Código del Trabajo, ordenando el pago a cada actor de una serie de indemnizaciones legales y demás prestaciones laborales que se indica en dicho fallo, quedando ejecutoriado el mismo con fecha 21 de julio de 2022, remitiéndose dicho proceso para su cumplimiento al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, por ende, la parte demandada en el presente proceso no puede pretender hacer renacer la discusión del plazo de contabilización para interponer la acción por despido indirecto, atendido que dicha acción fue discutida y sometida al conocimiento de este Tribunal en el Rit N° O-1912-2021, tramitada ante este mismo Tribunal en contra de la ex empleadora de los actores, interponiéndose en aquella oportunidad la acción dentro de los plazos establecidos en el artículo 171 del Código del Trabajo, no existiendo posibilidad alguna que a través del presente proceso pueda volver a discutirse las formalidad en el ejercicio de dicho despido indirecto, sino que únicamente la eventual responsabilidad que le incumbiría a la demandada Clínica Santa María SpA, en el caso que sea declarado la existencia del régimen de subcontratación reclamado en el presente libelo, por lo que también, deberá ser desechada en todas sus partes dicha excepción.

Que siguiendo la misma línea de razonamiento, también debe ser desechada la excepción de prescripción opuesta por la demandada respecto de la acción de cobro de remuneración y nulidad de despido de los actores en virtud de lo establecido en el artículo 510 inciso 2° del Código del Trabajo, teniendo presente en el presente proceso no ha sido interpuesta acción alguna de cobro de



remuneración ni de nulidad de despido, sino que dichas acciones fueron conocidas en el proceso tramitado ante este mismo Tribunal, bajo el Rit N° O-1912-2021, declarándose la responsabilidad que le correspondía al ex empleador de los actores en dicho proceso respecto de dichas prestaciones laborales, sin embargo, en la presente acción no puede volver a discutirse su procedencia ni plazo para su interposición, menos aun si solo se persigue la eventual responsabilidad que le incumbiría a la demandada Clínica Santa María SpA en el crédito que por dichos conceptos mantienen a su favor los actores de autos, al no haber sido cumplido ni satisfecho, una vez ejecutoriada el fallo en dicho proceso por el ex empleador de los mismos, la empresa Secure Valet Parking Limitada.

NOVENO: Que en relación al fondo del asunto discutido, cabe tener presente que ha quedado establecido como un hecho de la causa, -en atención al mérito de la prueba documental incorporada por ambas partes y tenidos a la vista por este Tribunal-, que la demandada en estos autos, Clínica Santa María SpA, antes Clínica Santa María S.A., rut N°90.753.000-0, suscribió contrato de prestación de servicios con la empresa Secure Valet Parking Limitada (ex empleadora de los actores), con fecha 1° de julio de 2012, en virtud del cual, la primera contrató los servicios de la segunda a contar del día 13 de agosto de 2012 para recibir, estacionar y entregar los vehículos de los clientes que llegaban a los estacionamientos habilitados para tal efecto en dependencias de Clínica Santa María, ubicada en Avenida Santa María N° 0500, comuna de Providencia, por el periodo de 30 días, entendiéndose renovado automáticamente sucesivamente por periodos semestrales, si ninguna de las partes manifestare voluntad de darlo por terminado en el plazo que indica.

Que, asimismo, se ha tenido por establecido como otro hecho de la causa, que por medio de comunicación escrita de fecha 15 de julio de 2020 la demandada Clínica Santa María SpA informó a la empresa Secure Valet Parking Limitada, por medio de carta certificada de fecha 22 de julio de 2020, remitida al domicilio de esta última, que en virtud del Contrato de Prestación de Servicios de Valet Parking o Acomodación de vehículos celebrado entre dichas partes en el mes de julio de 2012 y, de conformidad a la cláusula décimo segunda del mismo,



la decisión de no renovar la vigencia de dicho contrato, terminando el contrato vigente a contar del día 31 de agosto de 2020, hecho reafirmado tanto por el mérito de la documental incorporada por la demandada que da cuenta del cumplimiento de las formalidades establecidas por las partes para comunicar el termino de dicho contrato de prestación de servicios.

DECIMO: Que, asimismo, cabe tener presente que se trata de un hecho establecido en la causa tramitada ante este mismo Tribunal bajo el Rit O-1912-2021, que los trabajadores demandantes Jeiber Jesús Morales Hidalgo y Rolando Andrés Illanes González fueron trabajadores dependientes de la empresa Secure Valet Parking Limitada en el periodo comprendido entre el 1° de julio 2019 al 20 de enero de 2021 y, la trabajadora Estefani del Valle Ramírez Sierra en el periodo comprendido entre el 27 de agosto de 2019 y hasta el 1° de febrero de 2021 y, que desempeñaron servicios como conductor, captador y estacionador en el caso de los dos primeros y de llavera direccionadora, en el caso de la última trabajadora, en el estacionamiento de la Clínica Santa María, ubicado en Av. Santa María 0500, comuna de Providencia, apareciendo informados los actores Jeiber Jesús Morales Hidalgo y Rolando Andrés Illanes González como trabajadores dependientes de la empresa Secure Valet Parking Limitada por la demandada Clínica Santa María para efectos de emisión del certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales ante la Dirección del Trabajo en el periodo comprendido entre el mes de julio de 2019 y marzo de 2020 y, en el caso de la trabajadora Estefani del Valle Ramírez Sierra aparece en el periodo comprendido entre noviembre de 2019 y marzo de 2020; hecho que se tiene por establecido con el mérito de las respuestas de los oficios dirigidos a dicho Servicio administrativo y certificados remitidos y de la documental incorporada por la demandada, no objetada de contrario, no existiendo otra prueba rendida por la parte demandante que permita tener por establecido un periodo mayor al informado.

Que los hechos antes expuestos y prueba analizada, permiten concluir que el régimen de subcontratación reclamado por la parte demandante respecto de la empresa Clínica Santa María SpA había concluido con anterioridad a la época en



que cada uno de los trabajadores antes individualizados ejerció el auto despido reclamado en el proceso Rit O-1912-2021, atendido que estos recién se auto despidieron con fecha 20 de enero de 2021 en el caso de ambos actores y 1° de febrero de 2021 en el caso de la actora, fecha bastante anterior a la época en que ha quedado establecido que la demandada en estos autos informo por correo certificado a la ex empleadora de los actores el termino del contrato de prestación de servicios celebrado entre las partes en el año 2012, culminando el mismo a partir del día 31 de agosto de 2020, no existiendo incluso ningún antecedente probatorio alguno idóneo incorporado por la defensa de los actores, que dé cuenta que efectivamente los trabajadores demandantes desempeñaron servicios para su ex empleadora Secure Valet Parking Limitada, bajo régimen de subcontratación para Clínica Santa María SpA más allá del mes de marzo de 2020, tal como aparecen informados en los respectivos certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales emitidos por la Dirección del Trabajo, desconociéndose las circunstancias en que fueron desarrolladas las labores por cada uno de los actores a contar del mes de abril de 2020 y hasta la fecha en que culmino el contrato de prestaciones de servicios entre ambas empresas antes aludidas en agosto de 2020, ni menos aún en la época en que recién ejercieron la acción de auto despido en enero y febrero de 2021, respectivamente, por lo que solo cabe desechar la demanda en todas sus partes.

DECIMO PRIMERO: Que la prueba ha sido analizada de conformidad a las reglas de la sana crítica y, el restante material probatorio en nada altera lo antes concluido.

DECIMO SEGUNDO: Que estimando que la parte demandante resulto totalmente vencida y, que tuvo motivos plausibles para litigar, no se la condenará en costas.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 1, 7, 183-A y siguientes, 420 y siguientes del Código del Trabajo, se resuelve:

I.- Que, se **RECHAZAN, en todas sus partes**, las excepciones de falta de litis consorcio pasivo, caducidad, prescripción opuestas por la demandada **CLÍNICA SANTA MARÍA SpA**, con costas, las que se regulan en la suma de



\$700.000 en su totalidad, al no haber existido fundamento plausible para su interposición.

II.- Que, se **RECHAZA, en todas sus partes**, la demanda interpuesta por el abogado Matías Horacio Novoa Carbone, en representación de don **JEIBER JESUS MORALES HIDALGO**, don **ROLANDO ANDRES ILLANES GONZALEZ** y doña **ESTEFANI DEL VALLE RAMIREZ SIERRA** en contra de **CLÍNICA SANTA MARÍA SpA**.

III.- Que habiendo resultado totalmente vencida la parte demandante, y estimando que tuvo motivos plausibles para litigar, no se la condena en costas.

IV.- Ejecutoriada que sea la presente sentencia, cúmplase lo resuelto en ella dentro de quinto día hábil, de lo contrario remítanse los antecedentes al Juzgado de Cobranza Laboral Previsional de Santiago para su cumplimiento compulsivo.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

RIT N°O-5435-2022

RUC N° 22-4-0425054-3

Dictada por doña **ANDREA PAOLA SOLER MERINO**, Jueza Titular del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

